

Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe



**Ambiente, cambio climático y
buen vivir en América Latina
y el Caribe**

Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe / Tatiana Cuenca ... [et al.]; prólogo de Jacqueline Laguardia Martínez; Grettel Navas. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.

Libro digital, PDF - (Becas de investigación)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-158-0

1. Medio Ambiente. 2. Mapuches. 3. América Latina. I. Cuenca, Tatiana. II. Laguardia Martínez, Jacqueline, prolog. III. Navas, Grettel, prolog.

Andrea, coord. III. Vommaro, Pablo A., coord. IV. Pengue, Walter A., prolog.

CDD 303.48

Diseño de tapa: Dominique Cortondo

Diseño interior: María Clara Diez

Edición: Carla Fumagalli

COLECCIÓN **BECAS DE INVESTIGACIÓN**

Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora Editorial

Pablo Vommaro - Director de Investigación

Karina Bidaseca - Coordinadora de Programa

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Gestión Editorial

Nicolás Sticotti - Fondo Editorial

Equipo Área de Promoción de la Investigación

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Natalia Gianatelli, Rodolfo Gómez, Sofía Torres, Teresa Arteaga, Tomás Bontempo y Ulises Rubinschik



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe (Buenos Aires: CLACSO, 2022). ISBN 978-987-813-158-0



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

| | |
|--|-----|
| Prólogo..... | 9 |
| <i>Jacqueline Laguardia Martínez y Grettel Navas Obando</i> | |
| Resistencias al extractivismo y defensa del territorio de las mujeres zoques del Norte de Chiapas..... | 13 |
| <i>Tatiana Cuenca Castelblanco</i> | |
| Cuerpos – Territorios marcados por el despojo y el sacrificio | 85 |
| Casos Huitotos (Perú) y Kaiowá y Guaraní (Brasil) en clave comparada | |
| <i>Letícia Larín y Juan Manuel Delgado Estrada</i> | |
| Capacidad de resiliencia comunitaria de la población afrocolombiana de La Barra frente a los fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático | 141 |
| <i>Luz Carina Durán Solarte</i> | |
| Organizaciones sociales del Bajo Cauca antioqueño (Colombia) | 191 |
| Experiencias alternativas frente a conflictos socioambientales asociados al cambio climático | |
| <i>Cindy Vanessa Quintero Ramírez y Manuel Alejandro Henao Restrepo</i> | |

| | |
|--|-----|
| Cómo gobierna REDD+ en Ecuador | 245 |
| Resistencia y consentimiento en el marco de múltiples ambientalidades asociadas al programa PROAmazonía <i>Sara Latorre y Andrea Bravo</i> | |
| Alternativas al extractivismo..... | 301 |
| Rutas para transformar los territorios <i>Marisabel García Acelas y Robert Adrián Quintero Leguizamón</i> | |
| Glaciares y cosmovisión mapuche..... | 393 |
| Propuestas locales para la defensa y protección del patrimonio biocultural <i>Marisela Pilquimán Vera, Stefanie Ramírez y Clarena Rodríguez Jaramillo</i> | |
| Litio, transición energética, economía política y comunidad en América Latina..... | 441 |
| <i>Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente</i> | |
| Ñande reko o experiencias del “buen vivir” en las organizaciones rurales femeninas, indígenas y de jóvenes..... | 521 |
| Estrategias socioeconómicas y ambientales de mitigación de impactos del cambio climático en Paraguay <i>Sarah Patricia Cerna Villagra, Agustín Carrizosa y María Irene Rodríguez</i> | |
| Visiones sobre el Buen Vivir | 581 |
| Una aproximación a las concepciones de bienestar de la juventud Emberá Katío del Alto Sinú, Córdoba <i>Stefannia Parrado Morales</i> | |
| Sobre los autores y autoras..... | 653 |

Organizaciones sociales del Bajo Cauca antioqueño (Colombia)

Experiencias alternativas frente a conflictos socioambientales asociados al cambio climático

Cindy Vanessa Quintero Ramírez y Manuel Alejandro Henao Restrepo

Presentación

El escenario del cambio climático, producto de la degradación del entorno ambiental como consecuencia de factores antrópicos, ha puesto en escena la necesidad de replantear el horizonte de sentido con el que se asume el vínculo con la naturaleza, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, vistos como una mercancía más para la reproducción del capital. La crisis climática ha dejado entrever la importancia de asumir otras comprensiones y narrativas que, a la par de un cuestionamiento por las concepciones utilitaristas, generen propuestas de defensa, accionando estrategias concretas para mitigar las alteraciones y daños al ambiente. Frente a esto, los movimientos y organizaciones sociales se han convertido en una alternativa frente a estas versiones depredadoras, generando además una hoja de ruta a partir de sus aportes, que se hace necesario comprender, visibilizar y fortalecer.

Con esta intencionalidad se da inicio al ejercicio de investigación del cual se da cuenta en el presente informe, en el que se tenía como precedente el reconocimiento de las experiencias de organización social como propuestas alternativas ante un modelo de sociedad insostenible, que pone en riesgo las condiciones de vida en el hogar común: el planeta.

El Bajo Cauca, región en la que se llevó a cabo esta investigación presenta una dinámica de extractivismo intenso de recursos naturales por la minería, ganadería y agroindustria. No se trata de un escenario ausente de disputas, y es allí donde aparece la pregunta por las organizaciones sociales en medio de las diversas situaciones con las que se encuentran, y por las que han generado procesos de resistencia y defensa de sus lugares de vida: los ríos, ciénagas, humedales y bosques.

Precisamente, se da apertura a esta investigación con la pregunta por las maneras en que las organizaciones sociales del Bajo Cauca antioqueño construyen experiencias alternativas y han abordado los conflictos socioambientales como escenario de disputa por visiones de sociedad, generando valiosos aportes en la mitigación de los efectos del cambio climático. Esto fue posible a través de la apertura de las comunidades y su interés por visibilizar sus apuestas y acciones, pese a las difíciles condiciones impuestas a causa de la pandemia por el Covid-19. La investigación se realizó a través de conversaciones, entrevistas y recorridos, vivenciando, en algunos casos, cotidianidades, relaciones y conflictividades con las que se encuentran los territorios y quienes los habitan.

En el presente texto, se encuentran recogidas algunas de las reflexiones y análisis contruidos a partir del encuentro con los sujetos, sus voces, saberes y sentires que generosamente compartieron. En la primera parte, se presentan algunos elementos que permiten la comprensión de los conflictos socioambientales, así como la identificación de las principales problemáticas y consecuencias que presenta el territorio. Seguidamente, se realiza una descripción de las experiencias organizativas del Bajo Cauca con las que se desarrolló

el ejercicio de investigación, para proponer una reflexión respecto de las manifestaciones de los conflictos y disputas socioambientales en la región. Finalmente, se destacan los principales aportes de las organizaciones en el contexto del cambio climático.

Conflictos Socioambientales en el Bajo Cauca Antioqueño: un marco de comprensión de la dinámica extractiva en la región

En este apartado se retoman los principales elementos para comprender los conflictos socioambientales que se desarrollan en el Bajo Cauca antioqueño. Para esto, se identifica a los principales actores en el territorio, así como sus intereses y sus posturas sobre asuntos ambientales. Seguidamente, se presenta un recuento de los principales problemas ambientales reconocidos por las comunidades y sus características para, finalmente, dar cuenta de escenarios y estrategias en las que se manifiestan los conflictos presentes en la zona.

Sujetos presentes en el Bajo Cauca Antioqueño

En la región del Bajo Cauca confluyen múltiples actores con una alta diversidad de intereses, procesos, prácticas y procedencias. La configuración poblacional y territorial de la región está marcada por la llegada de múltiples grupos humanos a lo largo de la historia, quienes, atraídos por diferentes motivos, se han asentado y han consolidado procesos de relación que marcan configuraciones territoriales específicas. Uno de los motivos más fuertes se encuentra asociado a la riqueza hídrica, ecosistémica y económica, sobre todo por la extracción de minerales. Un ejemplo de ello lo revela la fundación de la población de Cáceres en 1576 y su posterior declaración como distrito minero en 1578 (West, 1972). En décadas recientes, la región

también fue foco de llegada de personas producto de la economía generada por la guerra, el auge de la explotación minera y el cultivo de coca principalmente.

Sujetos que configuran la comunidad

Al indagar por la conformación de las organizaciones y las comunidades de las que son parte, principalmente se habla de tres poblaciones: campesinos, afrocolombianos e indígenas. Aunque es importante mencionar que en algunos casos esta división es arbitraria, debido a los diálogos y entrelazamientos culturales que se crean. Sin embargo, es vital mencionarla dado que genera procesos identitarios particulares y, por ende, específicas dinámicas de apropiación del territorio.

En términos generales se rescatan dos dinámicas de conformación de las organizaciones: por un lado, se encuentra la integración de vecinos de las veredas o territorios que parten del interés de la generación de condiciones de vida para sus comunidades y, por otro lado, la presencia de varias personas que comparten vínculos familiares, quienes apuestan por el mejoramiento de las condiciones colectivas. Fue además posible identificar la diversidad de actores que componen cada organización, y la cada vez mayor cualificación de sus miembros, tanto a nivel formal, como no formal.

Por otro lado, en términos de la procedencia cultural de las comunidades indígenas, se evidenció la presencia del pueblo Zenú y del pueblo Embera, agrupados en el Cabildo Mayor de Cáceres. Para estos pueblos, la figura del sabio es clave en la construcción de memoria y saber ancestral. Asimismo, las figuras de cacique y guardia indígena son remarcados constantemente como sujetos clave de la conformación cultural.

Para estas comunidades un sujeto presente en la cotidianidad de la región es el río, entendido como dador de vida. La zona principal que atraviesa y denomina la subregión es el río Cauca, reconocido

como entidad-sujeto de derecho de especial protección y restauración el 17 de junio de 2019 (Sentencia 038 de 2019 del Tribunal Superior de Medellín). Para las comunidades, el río es un sujeto vivo que permite y da la vida; algunas de ellas lo llaman el *Papá Momo* como una forma de reconocerlo y mostrar su vínculo estrecho y relacionamiento cotidiano.

Aunque no está presente en todas las comunidades, se rescata la vinculación del Movimiento Ríos Vivos, proceso de acción colectiva que trabaja para la visibilización de consecuencias e impactos de la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, con relación a la afectación sobre las comunidades aledañas al Río Cauca.

Sujetos en relación con la comunidad

El principal actor reconocido por las organizaciones es Corantioquia, autoridad ambiental de carácter público.¹ De igual manera, sus miembros mencionan la importancia de las mesas ambientales y su relación con la dinámica del territorio. Esta es una instancia de relacionamiento promovida por Corantioquia con una dinámica subregional. Estas mesas funcionan tanto a nivel municipal, como a nivel temático y de la región; para el caso de la entidad autónoma, esta recibe el nombre de región PanZenú en honor a los pueblos originarios de la zona (Corporación Conciudadanía, Corantioquia, 2015).

Asimismo, es recurrente la mención a la empresa Mineros S.A., que realiza actividad de extracción de oro en la zona. Por lo general, se hace referencia a ella como empresa “padrina” que apoya la realización de iniciativas comunitarias.

¹ La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), es un organismo gubernamental colombiano encargado de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables (Corantioquia, s.f.).

Otro actor referenciado ampliamente por los miembros de las organizaciones es Empresas Públicas de Medellín, particularmente asociado al proyecto Hidroituango; su presencia tiene gran incidencia en la zona, sobre todo en periodo posterior a la emergencia generada en la construcción de la represa en el año 2018, con el taponamiento de túneles de desviación.

Los finqueros y dueños de fincas son también mencionados recurrentemente como vecinos de las comunidades, ya que muchas de las relaciones con la propiedad de la tierra, el agua, los bosques, etc., tiene que ver con estos. Se rescata su actividad ganadera.

En términos de las entidades gubernamentales, se destaca la relación con las alcaldías municipales y, respecto de estas, se percibe una relación intermitente que depende de dos factores: por un lado del apoyo político que la comunidad haya realizado a quienes se encuentran en el gobierno del municipio y, por otro lado, de una presencia puntual para procesos o proyectos que se ejecutan. Se identifica también la Agencia de Renovación del Territorio (ART), adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, responsable de coordinar acciones en los territorios afectados por el conflicto armado en zonas priorizadas por el Gobierno, y es además la responsable de la gestión de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, instrumento contemplado en los Acuerdos de Paz con las FARC, en la línea de reforma rural integral.

De manera más reducida, se menciona a la Autoridad Nacional de Acuíferos y Pesca AUNAP, que viene trabajando con EPM en la zona para la recuperación y la conservación del río Cauca, luego de la emergencia con Hidroituango principalmente. También se reconoce la presencia y la relación con dos instituciones de educación superior: la Universidad de Antioquia y el SENA, tanto como escenarios de formación, como de investigación realizada en la zona.

Se rescata la presencia de entidades de cooperación internacional, sobre todo USAID, Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, Fundación Panamericana para el Desarrollo y la

Cruz Roja Colombiana. Finalmente, se identifica la relación con la Diócesis Católica de Santa Rosa de Osos, que desarrolla y subvenciona proyectos sociales con las comunidades.

Igualmente, vale la pena resaltar que se identifican actores armados que permanentemente desarrollan acciones bélicas en la zona. No se hace mención explícita en particular, pero los relatos en torno a sus acciones están presentes en las conversaciones y espacios de trabajo desarrollados por la investigación. Es importante mencionar que en la zona actualmente hacen presencia grupos armados como *Los Caparros*, el *Clan de Golfo*, Autodefensas Gaitanistas, Disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Interés e ideas divergentes entre los sujetos presentes en el territorio

Se pueden identificar tres posturas en el proceso de indagación desarrollado: por un lado, la perspectiva de las organizaciones; por otro, la del Estado; y, finalmente, la de las empresas privadas. A continuación, se abordará cada una de ellas.

Las organizaciones

Las organizaciones rescatan la importancia de la tenencia de la tierra como posibilidad para salvaguardar el territorio. Esta idea es base, y a partir de allí se plantea la posibilidad de resolver la vida, mantener las prácticas ancestrales y cotidianas, y generar condiciones para las nuevas generaciones. Alrededor del territorio y su apropiación, las comunidades reivindican la garantía de sus derechos, el cuidado de la tierra, la conservación del ambiente, la generación de condiciones económicas para la vida, y la recreación constante de sus usos y costumbres culturales. Además, reconocen constantemente las profundas inequidades en las que viven, y plantean la necesidad de generar condiciones que les permita superar el deterioro de las condiciones de vida, en razón de lograr un bien vivir.

También vale la pena mencionar que en las comunidades se cruzan constantemente ideas divergentes entre sus miembros, marcadas en general por la búsqueda de intereses individuales, de resolver la vida, la economía, etc.. Estas ideas divergentes también se hacen explícitas en el proceso organizativo, y generan, en muchas ocasiones, conflictos y rupturas en su interior.

Las empresas y finqueros

En el caso de las empresas y los llamados finqueros, las personas entrevistadas hablan de los intereses económicos como movilizadores de las relaciones. Se plantea que en la región se cruzan muchos intereses alrededor de la titulación de tierras, de los títulos mineros, entre otros.

...que acá en el territorio, detrás de los intereses, por ejemplo, sociales, hay unos que prevalecen y son los intereses económicos, y no intereses económicos de cualquier dos o tres... sino intereses económicos de multinacionales algunas que ya tienen solicitudes de títulos mineros y algunos que quieren hacer solicitudes de títulos mineros en el territorio (D12).²

Además, se plantea que las empresas realizan actividades de mitigación del impacto de su acción con proyectos para las comunidades, acciones de reforestación, repoblamiento de poblaciones de peces, etc.. No obstante, se reconoce que mucho de esto se lleva a cabo para mostrar que se realizaron las acciones, pero no en respuesta a las realidades y condiciones de los territorios y las mismas comunidades, lo que genera consecuencias sobre la estabilidad de los ecosistemas. A este respecto, en una de las entrevistas se manifiesta:

² Se utiliza esta estrategia de citación para nombrar las voces de los líderes y líderes de las organizaciones sociales del Bajo Cauca con las que se realizó el ejercicio (municipio de Cáceres, Cauca, El Bagre y Nechí). Corresponde a la asignación que se generó para distinguir los documentos y transcripciones de las entrevistas y conversaciones en el proceso de codificación.

La empresa dentro de sus políticas tiene la recuperación de esas zonas que ellos van degradando y el que les favorece a ellos (no a la tierra) es la Acacia, entonces ellos lo siembran, eso se pega solo y se va rápido, entonces usted pasa por encima y ve esa zona verde. En esos cargueros donde lo siembran no se les muere un palo, en cambio acá a los nativos, a los pobres... ombe yo me acuerdo que había unos tan bonitos en la capilla, ahí alrededor de la caseta vieja de la capilla había unos tan bonitos y toditos se murieron (D18).

La reforestación con *Acacia Mangium* es una estrategia propuesta por Corantioquia, para la reforestación de áreas degradadas por la explotación minera, dada su resistencia y posibilidad de crecimiento en suelos con baja calidad. Esta estrategia tiene un objetivo forestal orientado a generar actividades económicas alternativas para la región.

Una de las consecuencias de este interés en la relación percibida con las empresas se relaciona con la dinámica de la titulación de tierras. En los últimos años se ha generado un proceso de restablecimiento de tierras, sea por reparación a víctimas del conflicto armado, o por titulación a comunidades indígenas y afro. En el primer caso, una vez se titula la tierra, los grandes inversionistas o lo terratenientes buscan comprarla a bajo costo, facilitado por la legalidad del sector, lo que genera un proceso de acumulación mayor que desplaza a los campesinos hacia zonas urbanas, y los ubica como empleados de los poseedores de tierra y las empresas privadas presentes.

Los gobiernos

Una de las mayores percepciones que tienen las comunidades sobre los intereses de los gobiernos, sobre todo a nivel nacional, es que su objetivo es fundamentalmente económico, asociado a facilitar la acción de las empresas y terratenientes; consideran que el interés no está en la generación de mejores condiciones de vida para la población, sino en la explotación económica de la región. En otras

palabras, existe la sensación de abandono de los territorios y el desinterés en generar condiciones para una economía campesina, la resolución de necesidades básicas como alimentación, educación, salud y, principalmente, la generación de oportunidades para la realización de una vida en paz, en la que sea posible construir apuestas individuales y colectivas.

Otra de las dinámicas identificadas por las organizaciones es la vinculación de los gobiernos a las prácticas políticas clientelistas y tradicionales. Se manifiesta que en muchas alcaldías municipales se presentan ese tipo de hechos en los que los candidatos de turno buscan el apoyo de las comunidades a cambio de favores políticos o inversión social; esto genera que la movilización de la acción gubernamental hacia determinados territorios se condicione al apoyo que las comunidades hayan dado al grupo político ganador, ya que en caso contrario, se dificulta lograr que se atiendan necesidades, se garanticen derechos, o se apoyen procesos liderados desde esas comunidades.

A este respecto, uno de los líderes de las organizaciones manifiesta lo siguiente, a propósito de lo complicado que es movilizar la acción del gobierno local cuando la organización no participa de los procesos clientelares,

Ellos ven que la idea no fue de ellos, obviamente no iba a ser de ellos, se les presentó la propuesta (hay unas personas muy buenas en ese equipo que presentó la propuesta), y entonces ellos la recibieron y pidieron ajustes, se le han hecho muchos ajustes, se le han hecho justificaciones, se le ha hecho todo lo que han pedido, pero ellos no han hecho nada de lo que hemos pedido. Entonces esa solicitud viene como desde el 2011 (D18).

En este sentido, se identifica poca voluntad de los gobiernos locales para sintonizarse con las problemáticas y la realidad de la región, más allá de intereses que muchas veces son personales o de partido, lo cual debilita la construcción de agendas de región que movilicen condiciones más allá de factores económicos.

Con relación a los grupos armados y sus intereses, no fue posible la indagación por este asunto entre los participantes de la investigación, dada la dificultad para hablar del tema y el recelo que genera.

Vale la pena señalar que pueden identificarse actores específicos que, incluso, hacen parte de los grupos aquí descritos. Sin embargo, hablar de estos cuatro actores (organizaciones, empresas-finqueros, gobiernos y grupos armados) permite identificar las dinámicas presentes en la región, y su relación con los problemas ambientales que, en muchos casos, generan conflictos entre ellos.

A continuación, se presentan entonces los principales problemas ambientales identificados en la región, y las dinámicas de conflicto que se generan alrededor de ellos en razón de los actores hasta aquí descritos.

Principales problemas ambientales y sus consecuencias

Para avanzar en el análisis de los conflictos socioambientales desde un marco más amplio que trascienda la mirada de la situación problemática concreta, inicialmente es importante precisar la distinción sugerida por Sepúlveda (2015), quien define la *presión ambiental* como acciones o actividades realizadas por el ser humano, que modifican o alteran condiciones de equilibrio de un recurso natural y, precisamente, desencadenan un *problema ambiental*. Siguiendo con este planteamiento, un problema ambiental se refiere a la consideración contraria a fines, intereses y visiones que hacen los actores de la relación de alteración del ser humano con la naturaleza; se construye desde una perspectiva histórica, presente o futura de lo que ha sucedido y se espera que suceda, dando una connotación negativa a su ocurrencia. Según señala Sepúlveda (2015), los problemas ambientales no siempre despliegan el conflicto. En ese sentido, el *conflicto socioambiental* implica una disputa entre actores, dada la oposición por los daños producidos a los ecosistemas naturales,

donde las comunidades locales, así como actores exógenos representados en organizaciones y procesos ambientalistas, ejercen una participación activa ante el desequilibrio ecológico producido por ese relacionamiento antagónico ser humano-naturaleza. “Desde esta perspectiva, lo ‘socio-ambiental’ tiene implícito el empoderamiento de las comunidades locales que han sido afectadas por algún tipo de daño ambiental, para impulsar cambios positivos de las realidades que enfrentan” (Sepúlveda, 2015, p. 5).

Esta distinción ha permitido precisar el análisis en torno a los conflictos socioambientales. Por ello se analizan problemas socioambientales que luego permitan hacer una relación con conflictos asociados presentes en el territorio. A continuación, se describe cada uno de estos:

Hidroituango y la afectación al Río Cauca

Uno de los principales problemas identificados en la zona está asociado con la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. La afectación generada por este proyecto se caracteriza principalmente por la modificación de corrientes y caudal del río, con la consecuente afectación al ecosistema, la modificación de los ciclos de inundación, y la dinámica de nacimiento, migración de peces y otros seres vivos. Se percibe una disminución de la cantidad de peces disponibles para la pesca; un cambio en las corrientes de agua, donde se hace más compleja la extracción de oro realizada por los barequeros; y la actividad de pesca genera una fuerte afectación sobre los cuerpos de agua como ciénagas y humedales. A este respecto se plantea:

Cuando ya llega el verano lo que pasa es que se pone como una leche que se baja demasiado espesa y ya no tenemos donde trabajar. ¿Por qué? porque el río ya no corre ni tiene tampoco la capacidad para arrastre, entonces el oro ya no lo ven, entonces tuvimos que saltarnos del Río Cauca porque no teníamos de dónde trabajar.(D74).

Minería, degradación del suelo y las fuentes de agua

Como se mencionó anteriormente, la región del Bajo Cauca antioqueño ha mantenido dinámicas de extracción minera desde el siglo XVI, siendo la dinámica de extracción, sobre todo de oro de aluvión, una de las mayores del país (West, 1972). En la actualidad se puede hablar de cuatro formas de explotación del oro: (1) la realizada por empresas o personas con títulos mineros y licencia de explotación minera, (2) barequeros tradicionales, (3) explotación informal y (4) explotación ilegal asociada a grupos al margen de la ley. Cada uno de estos actores y formas de explotación generan dinámicas diferentes y afectaciones sobre el medio ambiente.

Se puede afirmar que, de estas cuatro formas de explotación del oro, la que menos impacto ambiental genera es el barequeo, dado que es una actividad artesanal, no extensiva. Las mayores afectaciones que pueden identificarse en esta práctica tiene que ver con el uso que algunos barequeros realizan del mercurio para lograr mayor extracción de minerales preciosos, lo que afecta fundamentalmente su salud, la de su familia, y contamina las fuentes hídricas. Esta herencia minera ha generado diversas problemáticas ambientales; desde la perspectiva de las organizaciones esta afectación se relaciona con las siguientes.

Como los menciona Correa (2017), retomando un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, la mayoría de la minería en el Bajo Cauca Antioqueño se realiza de manera indiscriminada, sin control y, muchas veces, sin el conocimiento de la existencia real del mineral, lo que afecta el medio ambiente en la región y contribuye al deterioro de los suelos.

Deterioro del suelo

Se reconoce que la acción minera ha generado múltiples afectaciones al suelo, siendo esta la principal consecuencia identificada. La

remoción de material para la extracción, sea en el cauce del río o fuera de este, implica una remoción de masa, lo que genera la destrucción de la capa vegetal, el desplazamiento de seres vivos, y la destrucción de su hábitat. De igual manera, causa fuertes dinámicas de erosión de la tierra, así como el aumento, arrastre y depósito de sedimento en los cauces del río. En otros casos, se identifica la desviación de cauces de ríos, y el aumento de dinámicas de inundación y sedimentación, lo que afecta la dinámica de cultivos, genera riesgos de deslizamiento y desprendimiento de tierra, y daño a construcciones de las comunidades.

Por último, se reconoce que la actividad minera genera una alta contaminación de las fuentes de agua para el consumo debido al uso de químicos en el proceso de extracción, y a los desechos generados por el trabajo de explotación.

Acceso a agua potable

La dificultad de acceso a agua potable es otra problemática presente en el discurso de las organizaciones y tiene que ver, principalmente, con la reducción de fuentes, su contaminación, y la dificultad para el acceso en términos de infraestructura. En cuanto a la reducción de fuentes, los impactos de la acción minera, ganadera, forestal y cultivo de uso ilícito han generado un deterioro en las bosques y ecosistemas, a partir de la reducción de su capacidad para almacenar y disponer el agua, lo que causa el agotamiento de nacimientos y la reducción de cauces, bajas en niveles freáticos, entre otros.

Las afectaciones que generan estas problemáticas se encuentran alrededor de temas de salud por el consumo de agua contaminada y la dificultad para su tratamiento, la reducción de los cauces y fuentes, así como la dificultad para acceder al líquido, sobre todo en épocas de verano.

La minería también afectó porque esto tenía más agua, incluso esta quebrada aquí, esta quebradita se oía hablar al agua de noche ahí, se oía que hablaba el agua (*blu, blu, blu*), entonces ya muy poco habla, ahora es un chorrito lo que era abundancia, entonces todo eso fue explotado la tierra fue llevada, se la llevaron (D 86).

Acceso a la tierra

Muchas de las comunidades manifiestan no ser poseedoras de la tierra y ven en este un gran problema asociado con la dificultad de desarrollar, por ejemplo, procesos colectivos de conservación de fuentes, recuperación, producción, etc., que permitan la mejora de las condiciones de vida. Poseer la tierra se convierte en un factor fundamental para la vida digna en los territorios, junto con tener la posibilidad de custodiarla y regenerarla, así como hacer contrapeso a las lógicas economicistas que desarrollan empresarios y finqueros presentes en la zona. En los casos en los que las comunidades son titulares de las tierras, se da la posibilidad de emprender un trabajo de conservación, y en el caso de las comunidades indígenas y los consejos afro, por ejemplo, la de realizar procesos colectivos de fortalecimiento de la cultura, sus usos y costumbres.

Las comunidades barequeras identifican que la no tenencia de la tierra genera un deterioro de su calidad de vida y de acceso al trabajo. Manifiestan que es claro que el río no tiene una titularidad particular, sino que hace parte de los bienes de la nación por ser un bien público. Por lo tanto, el ingreso a los cauces depende de la voluntad de los privados y, por consiguiente, las dificultades para realizar el trabajo de barequeo son cada vez mayores por estar migrando constantemente para encontrar el lugar para trabajar, lo que hace del oficio un ejercicio desgastante y cada vez menos rentable.

Manejo y disposición de residuos

El aumento en la generación de residuos por parte de los habitantes de las comunidades también se convierte en problema ambiental altamente identificado; este se ve complejizado con la dificultad para su disposición final, dada la distancia entre las veredas, las malas condiciones de acceso, y las escasas políticas municipales en esta materia. Esta problemática aumenta la contaminación de fuentes hídricas y de suelos en el territorio. Además, vale la pena resaltar que los residuos no son en su mayoría biodegradables, lo cual afecta los ecosistemas de la zona por su lenta descomposición.

Cultivos de uso ilícito

Muchos sectores de la economía de la zona están permeados por la acción de grupos ilegales que desarrollan actividades económicas para su funcionamiento. Uno de estos casos es el cultivo de uso ilícito, con relevantes consecuencias dada la deforestación que se ocasiona en su producción y el uso de químicos que contaminan el agua y los terrenos, además de la presencia misma de los grupos armados que controlan el territorio. Las comunidades también hacen mención de la afectación que se generó en el territorio cuando se realizaban fumigaciones aéreas con glifosatos, contaminando cultivos, fuentes de agua y bosques, deteriorando los ecosistemas.

Los miembros de organizaciones manifiestan además que se evidencian dinámicas de ganadería extensiva que agota la productividad del suelo, genera reducción de los cauces de agua, drenajes que secan las tierras y erosión y pérdida de la capa vegetal que aporta a la reducción de temperaturas, especialmente en tiempo de verano. Así mismo, evidencian el aumento de monocultivos forestales que cambian la diversidad de los territorios donde se cultiva y generan contaminación por el uso de agroquímicos.

Experiencias alternativas en el Bajo Cauca Antioqueño: abordando conflictos socioambientales asociados al cambio climático

Las organizaciones sociales del territorio reconocen estos problemas ambientales y gran parte de sus acciones está relacionada con darle solución a los mismos, es por esto que es pertinente presentar aquí sus experiencias para dar cuenta de los aportes que realizan en términos de conflictos socioambientales.

Claves de lectura

Para dar inicio a esta reconstrucción de experiencias de organización social en el Bajo Cauca Antioqueño y su abordaje de conflictos socioambientales, se hace fundamental reconocer qué se entiende por *organización social*. De acuerdo a lo sugerido en Del Valle-Cárdenas *et al.* (2020), es una asociación que surge con la característica fundamental de apoyo a las comunidades en situaciones no atendidas por el Estado y el mercado, por lo tanto, es posible avizorar otra opción de sociedad, que generalmente contraría las lógicas mercantiles del modelo capitalista y su versión neoliberal.

es una comunidad que discursivamente delata los poderes dominantes e ilegítimos, que impiden la conquista de una sociedad de iguales, es intercambio recíproco, acceso libre y oportuno a la información, es coordinación de esfuerzos, es claridad de propósitos sociales debatidos (Torres, 2019, p. 75).

En este ejercicio de investigación se reconoce que comprender las organizaciones sociales aporta significativamente a la valoración de visiones y recursos con los que cuenta la sociedad para construir mundos posibles y, en este caso, como un aporte en el problemático panorama que propone la crisis climática global.

Retomando a Torres (2019), la organización social trasciende lo local debido a la conexión a escala global de intereses por el ambiente, la salud pública, el acceso a la tierra, y en general, por el incentivo de desarrollo de prácticas que garanticen el bienestar colectivo y el cuidado de la “casa común”: el planeta.

La materialización de estas apuestas se hizo evidente en las experiencias organizativas en el Bajo Cauca antioqueño que, en el marco de su dimensión concreta, generan aportes en un contexto global de cambio climático. Su gestión comunitaria por el cuidado y conservación de la naturaleza va más allá de una visión instrumental de uso y aprovechamiento de los recursos para la comunidad, se trata de una versión de participación y cooperación en una problemática que trasciende fronteras, culturas y modos de vida.

Asimismo, la noción de *territorio* cobra relevancia para la comprensión de estas experiencias organizativas, pues los procesos de defensa de las comunidades locales se fundamentan en una reappropriación de su espacio de vida, basada en la organización del territorio (Robledo, 2018). Por lo cual, este no es solo un espacio o un área poseída por una persona física o jurídica, sino que más bien se refiere a la diversidad de relaciones heterogéneas entre humanos y no-humanos que se hacen y deshacen en un lugar (Lyons, 2020) y configuran territorialidad. De acuerdo a Fernández-Labbé (2018), es la definición de un tipo de territorialidad y con ello la utilización de sus recursos y la creación o resignificación de las relaciones sociales lo que se convierte en el epicentro de las conflictividades.

En esta perspectiva, la territorialidad es constitutiva al territorio, pues se busca comprender como soporte material y básico del desarrollo social, y como producción social devenida de la actividad humana; es decir, como un proceso que construye, conserva, protege y defiende un sentido propio de vida (Echeverría y Rincón, 2000). Por su parte, la territorialización se concibe como el proceso mediante el cual se construye el devenir y acontecer

del territorio, genera el movimiento hacia la autonomía, dependencia o interdependencia, e incluye la desterritorialización y la reterritorialización. “De allí que el territorio se configure y reconfigure permanentemente, asumiendo variaciones imprevisibles en el tiempo (cuyos períodos y duraciones bien pueden ser largos o cortos y cuyos ritmos de variación pueden ser acelerados o lentos)” (Echeverría y Rincón, 2000, p. 19).

Las múltiples territorialidades que construyen comunidades y poblaciones entran en disputa por un tipo de territorialización operado por una visión del territorio asociado a su uso o como recurso instrumental, privilegiando una de las dimensiones: la económica. Se pretende comprender el territorio en clave de la multidimensionalidad y multiescalaridad que lo contienen; las escalas geográficas relacionadas entre sí, y las dimensiones vitales desarrolladas como elementos característicos del mismo (Manzano, s.f.).

Con estas claves de lectura, es posible adentrarse en el contexto de surgimiento, acción y proyección de las organizaciones sociales del Bajo Cauca, concibiendo estas experiencias como constructoras de nuevas narrativas sociales, que aportan en el escenario global de la crisis climática.

Descripción de las experiencias de organización social en el Bajo Cauca

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las organizaciones con la que se trabajó en este estudio, mostrando sus particularidades y características, además de elementos para identificar su aportes en términos de problemáticas ambientales.

Mitigando efectos de la contaminación: Asociación Ambiental Las Pampas (Aso Pampas) como una apuesta económico-ecológica de mujeres (Cáceres, Antioquia)

La asociación se encuentra en el municipio de Cáceres y surge con dos objetivos principales: el cuidado ambiental a través del manejo de residuos sólidos de la vereda Las Pampas, y como posibilidad de generación de empleo para las asociadas, ya que cuenta con la característica de ser un proceso liderado fundamentalmente por mujeres. Posteriormente, inician actividades de limpieza y recuperación de humedales con apoyo de la administración municipal y Corantioquia, actores clave de relacionamiento y apoyo en la gestión organizativa.

Esta experiencia está conformada por 23 integrantes, y el proceso de legalización como asociación se da en el año 2006, momento en el que estaba integrada únicamente por mujeres. Hacia el año 2011 se incorporan otros integrantes, cuando se inician las acciones respecto del cuidado hídrico con la recuperación de humedales. Es así como sus principales líneas de acción son la limpieza de humedales y el manejo de residuos sólidos, actividad a la que se han dedicado durante los últimos cuatro años, en los cuales se ha consolidado “La Recuperadora la Troncal” como proceso de gestión de los residuos, transformación y venta; esto último, coincide con uno de los propósitos iniciales referido a la generación de ingresos para las asociadas, con la intencionalidad de, en sus palabras, “sentirse útiles”.

La organización tiene un fuerte componente partidista en el sentido de su gestión y acción. Por ejemplo, se hizo evidente que una parte importante de las actividades que se han realizado se desarrollan con el apoyo de la administración municipal, dado el nivel de relación que tiene la organización y sus integrantes con el gobierno de turno. La voluntad política para el trabajo ambiental y el reconocimiento de la organización por parte de la administración municipal, son elementos decisivos en las propuestas generadas en torno

al cuidado hídrico, mientras que, el manejo de residuos sólidos se constituye en un accionar en el que la organización tiene mayor autonomía, convirtiéndose incluso en una opción de empleo.

Por otro lado, se hace evidente una apuesta de género de la organización en términos valorativos y de ejecución. En primer lugar, se sostiene una convicción frente a que son las mujeres quienes pueden movilizar cambios importantes; consideran que las mujeres son mejores administradoras de los recursos, y que, en el caso de lo ambiental, se trata de recursos naturales que se deben cuidar con empeño. Precisamente, y ligado a su componente político partidista,³ en las elecciones de la alcaldía 2020-2023 apoyaron en campaña a una mujer en la que veían la posibilidad de realizar aportes locales y transformaciones de fondo.

En segundo lugar, la vinculación de mujeres se sustenta en el propósito de capacitarlas, inicialmente como aporte a sus economías familiares, y luego como fortalecimiento de la participación a través de espacios formativos que amplíen sus perspectivas, sensibilizándose en la importancia del cuidado de sus ecosistemas y, por lo tanto, apalancando iniciativas de mitigación, restauración y conservación del entorno natural.

Aportes de la experiencia en problemas ambientales presentes en el municipio

Siguiendo la definición de problema socioambiental que retoma la distinción presentada por Sepúlveda (2015), Aso Pampas ha logrado identificar como *problema ambiental* la acción de la minería, concretamente por la degradación de los ecosistemas; sin embargo, es de destacar las condiciones políticas y sociales de la zona y del

³ Es importante destacar que en el territorio hay una fuerte tendencia a elegir personalidades o partidos para apoyar en campaña para elecciones municipales y regionales, y como organizaciones encontrar “algunos beneficios”, desde una cultura política “clientelar” tradicional en la región.

municipio en particular, que ponen en relieve la posibilidad de una disputa o acción de rechazo directa.⁴

Es así como, de acuerdo con lo mencionado, la organización ha generado los siguientes aportes a la problemática ambiental que se presenta en el territorio:

- Recuperación de humedales

Se han realizado limpiezas en Río Man con invitación de Corantioquia. La organización presenta tres proyectos en años consecutivos que les han permitido una importante experiencia en la recuperación de humedales en el territorio. Estas jornadas de limpieza, según el relato de las integrantes, generaron ingresos por jornal para la comunidad, y fueron acompañadas de ejercicios formativos en torno al cuidado ambiental, caminatas lúdicas y sancocho comunitario. Esto con la intencionalidad de visualizar lo realizado e ir más allá, y con el propósito de sensibilizar a la comunidad y a quienes desarrollaban el ejercicio sobre la importancia del cuidado de humedales y de la protección del ecosistema que circunda, en una suerte de “sentido de pertenencia” “porque voy a estar pasando por ahí” (D11).

El humedal es intervenido “para sacar la turba” y “limpiar las laderas”. Según su narración, únicamente lo que está en la orilla; la parte interior no se toca; además, se ha realizado limpieza del espejo de agua para que las aves migratorias lleguen a desovar. Dentro de los caños intervenidos se encuentra el Caño Mandingo en la vereda de Río Man.

⁴ Cáceres es uno de los municipios que ha afrontado con mayor intensidad la renovada oleada violenta en la región del Bajo Cauca. En una de las salidas de campo se percibió el terror latente generado por los grupos armados ilegales presentes en el territorio. En la mañana de la visita realizada por los investigadores la comunidad se encontraba “encerrada” en sus viviendas; las tiendas no tenían la atención habitual y se sentía un ambiente de zozobra y confusión. Precisamente, en una de las entrevistas realizadas con las lideresas de AsoPampas, manifestaron el panorama de miedo y violencia con el que se convivía, por acontecimientos como asesinatos, el cobro de “vacunas”, incursión de la fuerza pública con el ejército, entre otros.

- Reforestación de zonas degradadas por la minería

Se han realizado iniciativas con el plantado de acacia macho (“el mayor recuperador de suelos”) y con teca, así como con árboles nativos como el cedro y canta gallo. Para esta acción en concreto se han encontrado con la dificultad de la permanencia, debido a que tanto las entidades que apoyan el ejercicio, o los propietarios de las zonas donde se realiza la recuperación, tienen la intencionalidad de explotar los árboles sembrados. Para la asociación, la intención es que las especies sembradas “queden ahí para siempre”, que puedan crecer y conservarse, y así lograr recuperar realmente el terreno.

Una importante experiencia de la organización en temas de reforestación fue el ejercicio de sembrado de árboles de acacia en siete u ocho hectáreas de tierra en la Hacienda Veracruz de la vereda donde se ubica la organización. “Hoy en día dicen ‘mira ve, eso fue lo que hizo Sandra aquí’, eso es un orgullo para uno... qué bonito se siente uno; vale la pena todo el esfuerzo” (D11).

- Proceso de manejo y recuperación de residuos sólidos

Actualmente la asociación adquiere ingresos con esta actividad. Para el reciclaje cuentan con un *motocarro* con el que recorren el corregimiento (Jardín)⁵ y veredas aledañas para la captación del material. Esto generalmente es realizado por las mujeres integrantes, y se lleva a la recuperadora para comenzar a separar y clasificar botellas de gaseosa transparentes, azules y verdes.⁶

⁵ Corregimiento de Cáceres, ubicación actual de la organización y donde se encuentra La Recuperadora la Troncal, en la cual se lleva a cabo el proceso de transformación del material captado.

⁶ Las de plástico color café no se reciclan porque estas ya han tenido un proceso de reciclaje anteriormente y, por ende, no se aceptan más.

El llanto de los árboles: reforestación y Derecho a la tierra desde la Asociación Intercultural por la Gente y los Bosques de la Serranía de San Lucas (El Bagre, Antioquia)

Uno maneja unos amores con su naturaleza, entonces cuando uno va hacia esos montes lejanos, uno oye la motosierra por allá y le da esa cosa a uno por acá, cuando ese árbol grande va cayendo, usted oye como si estuviera llorando, porque él a medida que va cayendo se va llevando a todos los hijos que están al lado, mientras se desgarran la rama, el bejuco; usted siente como el latigazo (D18).

En primer lugar, se destaca la sensibilidad ambiental que es posible identificar en esta experiencia organizativa, para la que es evidente una concepción valorativa de la naturaleza y una conexión estrecha con el territorio, a partir de lo cual se ha motivado el continuo trabajo de defensa, cuidado y conservación de los bosques.

La organización se ubica en el municipio El Bagre y cuenta con una importante incidencia en veredas desde el río Amacerí y la vereda La Rica en el centro del municipio, hasta el sur, con fuerte presencia en el corregimiento Puerto López, donde se ubica la reserva forestal Serranía de San Lucas, el cual es un espacio territorial frente al que se han generado acciones por el derecho a la tierra, uno de los enfoques de mayor trascendencia para esta experiencia organizativa.

Surge en 2011 como una apuesta por visibilizar problemáticas del territorio; una de ellas es lo ambiental: degradación de los bosques, los ecosistemas y recursos hídricos, situaciones generadas por los impactos de la minería, siembra de cultivos ilícitos y ganadería extensiva. Dentro de los actores clave de relacionamiento y apoyo al accionar del colectivo se encuentran: la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) y Corantioquia. Con su apoyo se realiza un proceso formativo en comunicación alternativa orientado por la Universidad de Antioquia. Desde allí, inicia una de sus líneas de acción: la comunicación de problemáticas ambientales en distintos formatos escritos y radiales.

La organización cuenta con 23 integrantes y formaliza su constitución con personería jurídica en el año 2015. Presenta una apuesta de trabajo articulado entre diferentes comunidades: afrodescendientes, campesinos, indígenas y mujeres, con una intencionalidad de trabajo en las zonas rurales, sobre todo lo que tiene que ver con la generación de sostenibilidad económica para las familias. En ese sentido, ha generado una importante proyección con relación a la gestión de proyectos productivos como el establecimiento de unidades piscícolas, apícolas, enriquecimiento de rastrojeras y siervo pastoreo.

Para esta experiencia, la gestión de la paz territorial se convierte en una importante línea de acción, por lo que acompañan la reparación colectiva de la población víctima del conflicto armado y la preparación de las comunidades para el pos-acuerdo. Desde el enfoque de construcción de paz territorial, para la organización ha sido relevante la interlocución con la administración municipal, con quien han mantenido diálogo, entre otros temas, respecto de la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).⁷ En este sentido se destaca la visión divergente que tienen como organización con respecto al accionar institucional, en especial con la administración municipal, con quienes sostienen diálogo sin perder su perspectiva crítica, en una suerte de “veeduría” por las irregularidades que suelen presentarse en la inversión de los recursos, ejecución de las obras, y transparencia de la gestión.

⁷ Se constituyen como instrumentos particulares de planificación y gestión a 10 años, y su objetivo refiere a la estabilización y transformación de los territorios que han sido afectados por la violencia, pobreza, economía ilícita y debilidad institucional, con el fin de avanzar en el desarrollo rural que requieren los 170 municipios priorizados. Esta figura surge a partir de los acuerdos firmados entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, específicamente el punto 1 sobre Reforma Rural Integral.

Aportes de la experiencia en problemas ambientales presentes en el municipio

El colectivo ha mantenido su enfoque de comunicación alternativa con el que surgen como organización, debatiendo sobre diferentes temáticas con relación a la problemática ambiental, y visibilizando distintas acciones de conservación y cuidado de los bosques y de las comunidades de las zonas rurales en general, que enfrentan mayores vulnerabilidades por el abandono estatal. El colectivo ha realizado los siguientes aportes:

- Defensa y gestión por el Derecho a la Tierra

Se ha generado un impulso hacia el derecho a la tierra en términos de gestión para el reconocimiento y formalización de comunidades étnicas y campesinas, implementando un ejercicio de conservación de la Serranía de San Lucas. Desde esta intencionalidad, la organización impulsa el trabajo articulado y hace parte de mesas de diálogo por el tema de tierras, donde coincide con otras organizaciones que tienen incidencia en la región como el Instituto Popular de Capacitación (IPC),⁸ la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia, la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana),⁹ entre otros actores institucionales y gubernamentales.

Precisamente, han venido gestionando el acceso a la tierra en la reserva forestal Serranía de San Lucas, en el corregimiento de Puerto López, donde habitan la mayoría de los integrantes y tienen la mayor incidencia en acciones de reforestación. En un primer momento, se planteó usar la figura de “Sustracción” como una estrategia para el acceso y, como organización, se generó la solicitud de sustracción de

⁸ Institución de promoción popular con vínculos y trabajo articulado con diversos sectores de la sociedad; promueve iniciativas de investigación, capacitación y formación (IPC, s.f.).

⁹ Organización campesina con incidencia en el Nordeste Antioqueño, en los municipios de Remedios y Segovia (Peace Brigades International, s.f.).

25 mil hectáreas pertenecientes al corregimiento y veredas cercanas. Posteriormente surgió el temor respecto a que esto facilitaría la acumulación de tierras por parte de terratenientes, pues es factible que a raíz de esto se genere una oferta de tierra a muy bajos costos y se perdería el propósito que la estrategia. A propósito, afirman:

Han habido momentos en los que hemos dicho: “mejor que no haya sustracción”, y ya casi no atacamos como antes, antes nosotros en todos los escenarios en donde estábamos, hacíamos fuerza por la sustracción, necesitamos la sustracción; en los foros en los que hemos estado, Medellín, Bogotá, Barranca, hacíamos énfasis en eso, ya nos hemos quedado un poco quietos porque vemos que sí es importante la sustracción pero que vaya acompañado de un paquete de formalización, y que vaya condicionada a que ... ¡ombre!, los habitantes sean los primeros en beneficiarse de eso (D12).

Es por ello que la apuesta de la organización en esta línea de trabajo es por la figura del DMI (Distrito de Manejo Integrado), buscando que las tierras que se entreguen estén bajo una figura legal que garantice el acceso y uso sostenible. Para ello, la opción más viable considerada por el colectivo es el DMI, con el cual sería posible condicionar el uso de la tierra en aras de la sostenibilidad.

Nosotros creemos que con el DMI y con la gobernanza que se establezca ahí con las comunidades desde un DMI, le va a ser menos posible a estos grupos empresariales y multinacionales, adueñarse del territorio de la serranía, y nos puede permitir a las comunidades acceder a ese título (D12).

- Recuperación de áreas degradadas con especies nativas y conservación de los bosques

Se ha realizado gestión en torno a la recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos en áreas degradadas por las acciones antrópicas, fundamentalmente por la minería y la tala de especies madereras. Precisamente, una de las acciones consiste en el establecimiento de viveros con especies forestales nativas de la zona.

En este sentido, se genera sensibilización en la comunidad en la que se realiza repoblamiento, frente a la importancia de los bosques y la conservación de las especies nativas que se siembran. Adicionalmente, se han generado acciones de ciervo pastoreo, que consisten en sembrar árboles maderables dentro de los potreros, por un lado, para dar mayor valor comercial a las fincas y, por otro lado, para facilitarle a los animales mayor confort. Esto se realiza bajo el fundamento de que los “potreros” deben contar como mínimo con diez árboles por hectárea, y como organización se ha considerado que es posible tener más árboles. El ciervo pastoreo no solo se realiza con árboles maderables y de alto valor comercial, sino que también “se incentiva la siembra con especies forrajeras como botón de oro, matarratón”, entre otros.

En la comunidad se decide qué especies convienen a qué áreas y dicen: “bueno vamos a reproducir”, y se consiguen las semillas, se hacen los viveros y se le va poniendo todo el cuidado. (...) cada proyecto trae unas medidas para trasladar el árbol al sitio de siembra, entonces cuando ya tienen las medidas se llevan allá a ese sitio, pero la clasificación es acertada porque la gente conoce, también como la gente ha vivido en el territorio, ellos saben que aquí lo que se da es esto, para las riveras de las aguas es esto, y entonces hemos hecho los viveros con relación a esas opiniones de la comunidad (...) (D18).

- Gestión para proyectos productivos

Se tiene una apuesta por la sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que las familias beneficiadas hacen parte de los territorios rurales donde se presentan mayores situaciones de vulnerabilidad. Se han desarrollado sistemas apícolas y piscícolas.

(...) mientras la ganadería se tiene que deforestar y rozar, la apicultura le dice “deja ese bosque”. Si se deja el bosque se gana porque el ambiente se mejora, ahí dentro de ese ambiente está el agua, el animalito, y está el beneficio que se saca la miel de la apicultura (...) (D12).

***Asociación Agropesquera Ambiental de Puerto Gaitán (APAPUGA):
experiencia de gestión comunitaria y ambiental del territorio***

La asociación está ubicada en la vereda Puerto Gaitán, corregimiento de Bijagual, limitando con el corregimiento Cargueros del municipio de Nechí, región del Bajo Cauca antioqueño. En la vereda habitan 55 familias que se dedican principalmente a actividades agrícolas, pecuarias y a la minería informal. El componente agropesquero surge como una alternativa a la actividad minera, y es descrito por la organización como “buenas prácticas ambientales” que permiten trascender la minería, que produce la degradación de la tierra, para producir alimentos en ella. En la actualidad, el retorno hacia la agricultura es realizado con fines de autoconsumo, sin embargo, se tiene la proyección de comercializar los productos.

El acceso a la vereda es por transporte fluvial, con un nivel de lejanía que ha generado que la comunidad se sienta “olvidada” de la gestión municipal.¹⁰ Esta suerte de ineficiencia estatal problematiza las condiciones dignas para los pobladores de este territorio. Actualmente, se encuentran sin centro de salud, carecen de infraestructura para el centro educativo, espacios deportivos, acceso a agua potable, redes de alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, entre otras situaciones.

Sin embargo, los habitantes han generado formas de autogestión comunitaria, y, debido precisamente al estado de abandono, han visionado el trabajo articulado como una oportunidad. Según su relato, trabajan en conjunto APAPUGA, la junta de acción comunal y la iglesia cristiana. También se pretende potenciar como estrategia de

¹⁰ Desde el Puerto de Nechí se toma una especie de lancha denominada por el entorno local “Johnson” (hace referencia al fabricante de la embarcación), cruzando por el río Nechí y el río Cauca; luego de un trayecto de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, se llega a un pequeño poblado. Atravesando un brazo del río desecado por la desviación del proyecto Hidroitango se logra entrever un acceso boscoso antes de llegar a la carretera principal, calle construida con el apoyo de la empresa Mineros Aluvial, al igual que otra infraestructura comunitaria, gestionada por la asociación con aporte de la entidad.

autocuidado en medio del panorama complejo de una oleada violenta que presenta la zona. De esta forma, se hacen visibles como proceso, sin personificar un liderazgo concreto. Por lo tanto, actividades como las proyecciones de cultivo, la construcción o adecuación de infraestructura comunitaria como el cementerio y un puente para conectar la vereda con la vía Ruta del sol, que es la salida al municipio de Caucasia, son producto de la organización y gestión de la comunidad, con el aporte económico de la empresa Mineros Aluvial, entidad con la que presentan un fuerte vínculo por el apoyo que han recibido y que hace parte de la Responsabilidad Social de la institución.

Concretamente APAPUGA se constituye en el año 2013 y se formaliza jurídicamente en el 2015. Está conformada por 27 socios, y entre sus principales aportes en torno a problemas ambientales presentes en el territorio, se encuentran:

Aportes de la experiencia en problemas ambientales presentes en el municipio

- Limpieza y recuperación de humedales

Se ha realizado limpieza de caños, desagües y mantenimiento de humedales que resultan taponados por los sedimentos y el crecimiento de plantas. Un referente al respecto son las acciones de repoblamiento en la Ciénaga La Esperanza, un espejo de agua de dos hectáreas aproximadamente, en el que se pretende la conservación de alevinos como la especie bocachico, contribuyendo a la economía familiar y como incentivo hacia la pesca artesanal.

- Incentivo hacia “nuevas prácticas ambientales”: siembra y cultivo

Se trata de una de las acciones de mayor resorte de la organización, ya que refiere al “regreso al campo” que es uno de los incentivos de promoción, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las familias habitantes, cuyo único ingreso proviene de la minería de tipo informal con impacto ambiental. Por lo tanto, su iniciativa de recuperación del ejercicio agropesquero

como actividad económica de las familias en la vereda, inicialmente para el sustento diario y, posteriormente, para la comercialización, se encuentra en el horizonte y proyecciones de la asociación.

Sin embargo, la comunidad no cuenta con tierra propia para volcar su economía hacia la agricultura. En la actualidad han logrado el acceso a 17 hectáreas de tierra, ofrecidas en comodato por la empresa Mineros Aluviales, en las cuales se ha sembrado principalmente maíz y arroz.

- Reciclaje y manejo de residuos sólidos

Esta iniciativa hace parte de una dinámica que contempla jornadas de capacitación para el manejo y disposición de los residuos, recolección de basuras, y sensibilización del cuidado del ambiente, que contribuya con una menor presión por parte de los habitantes respecto de la contaminación de los ríos, las cuencas y el recurso hídrico en general. Se han generado incentivos para la construcción de un centro de acopio donde se localicen las basuras y se generen acciones de separación y recuperación.

Cabildo Mayor de Cáceres: una experiencia histórica de defensa y lucha por el acceso al territorio

El proceso organizativo comienza en el año 2000 y es conformado por 10 comunidades indígenas: nueve comunidades zenú y una Embera Chamí. Se ha caracterizado por el proceso de gestión para el acceso a la tierra y la titulación de territorios colectivos. Actualmente ha logrado la titulación de cinco territorios y, a partir de ello, ha dado su constitución como resguardo, cuya figura es posible en la medida del acceso a territorio colectivo.

La Agencia Nacional de Tierras es un actor clave de relacionamiento para el cabildo y para las comunidades indígenas en general. Por medio de esta entidad gubernamental, se logró la gestión para la titulación colectiva, indispensable para, respecto del Gobierno,

ejercer su cultura y educación propia, usos y costumbres, y el desarrollo de distintas actividades de cuidado y conservación ambiental, de acuerdo a su cosmogonía de conexión y valoración de la naturaleza. En este respecto como organización que agrupa distintas comunidades, desde el desarrollo de sus actividades y acciones culturales y comunitarias, se pueden destacar los siguientes aportes:

Aportes de la experiencia en problemas ambientales presentes en el municipio

- Acceso a la tierra

Esta experiencia organizativa ha generado una continua acción de lucha y defensa del territorio, donde el acceso a la tierra es el principal resorte, ya que de este acceso se teje el reconocimiento jurídico de su conformación como organización étnica, y la posibilidad su defensa y conservación del entorno natural.

- Infraestructura comunitaria

Las comunidades que hacen parte del cabildo se han encontrado con la problemática del acceso al agua, así como de la poca disposición de aguas residuales. Con el apoyo de entidades como Corantioquia, han autogestionado la instalación de un acueducto comunitario y redes básicas de alcantarillado. Sin embargo, no en todas las comunidades se ha logrado el mismo nivel de avance y continúa siendo una acción de gestión, sobre todo respecto del acceso al agua potable. “Entonces toda el agua que consumimos es de los aljibes y no es agua cien por ciento calificada. Aquí se hicieron unos estudios de agua y no salió apta para el consumo, pero como nosotros tenemos un estómago ya curado...” (D86).

- Recuperación cultural de una cosmogonía vincular con la naturaleza

Un elemento importante en este punto es la educación propia indígena, respaldada por saberes tradicionales y culturales que trascienden la formación occidental para generar sensibilidades frente al cuidado de los ecosistemas y recursos hídricos, así como ejercicios

concretos de cuidado como la Guardia Ambiental Indígena y semilleros de Guardia de la Naturaleza, en los cuales se vela por el manejo de basuras en el territorio y el cuidado de los bosques.

Por otro lado, se ha realizado la conservación de reservas de la especie Guarumo “para sustraer el mercurio que tienen las islas, lo hemos logrado porque el guarumo se recoge todo el mercurio que hay, para que la producción de yuca, de plátano y arroz se forme” (D86).

Experiencia organizativa desde la Junta de Acción Comunal de la Isla Amargura

La isla en general está habitada por 146 familias campesinas y 56 familias indígenas.¹¹ La junta como experiencia organizativa presenta una intencionalidad hacia el trabajo articulado y el ejercicio de liderazgo con los demás actores de la isla, como la Asociación de Pescadores y Agricultores de la Isla Amargura (AsopeIsla), Asociación de Mujeres Campesinas de la Isla Amargura (ASUMUC) y el Grupo Juvenil Agroecológico de la Isla Amargura. A partir de esto, se generan acciones conjuntas en pro del bienestar de la comunidad. “Nuestra propuesta ha sido mejorar, principalmente mejoramos las vías de acceso que estaban bastante caóticas bastante malas sobre todo en invierno, organizamos las vías también organizamos en su momento la educación en el colegio” (D77).

Generan articulaciones con organizaciones, regularmente públicas, con el fin de generar recursos y apoyo para el desarrollo de las proyecciones como proceso organizativo, relacionadas con la construcción de infraestructura comunitaria y el incentivar la generación de proyectos productivos. Durante la trayectoria se destacan diversas acciones, y se identifican los siguientes aportes desde el accionar de la organización y su trabajo articulado:

¹¹ Comunidad indígena zenú de la Isla Dulzura, perteneciente al Cabildo Mayor de Cáceres.

Aportes de la experiencia en problemas ambientales presentes en el municipio

- Incentivo para el trabajo agrícola

Se apuesta por el retorno a la agricultura, el sembrado y cultivo en comunidad, y la gestión de proyectos productivos como la apicultura y la avicultura. “Tenemos un proyecto de una trilladora de arroz que queremos tener un molino para nuestros próximos productos darle la transformación y bueno también proyectos agrícolas como de plátano de arroz” (D85).

Como proyecciones se tiene la construcción de viveros para el sembrado de árboles frutales y maderables, como estrategia hacia las zonas despobladas, de acuerdo a la vocación territorial de zona boscosa.

- Limpieza de recurso hídrico

Como estrategia pedagógica respecto de la sensibilización en la comunidad del cuidado del entorno natural, se han desarrollado jornadas de limpieza y mantenimiento de la zona hídrica, riqueza del territorio. Estas jornadas se han constituido como días cívicos en los que se desarrollan diferentes actividades y se motiva al ejercicio de liderazgo ambiental a niños y jóvenes.

Los días cívicos nosotros nos reunimos, por decir algo, venimos aquí, organizamos, limpiamos, barremos, fumigamos, los caminos se limpian (...) limpiamos el puerto, este camino lo dejamos limpiecito hasta el puerto desde cierta parte y hacemos una serie de actividades (D85).

- Manejo y disposición de basuras y residuos

Acciones de este tipo son realizadas fundamentalmente por el grupo agroecológico y, pese a la problemática en la que se encuentra la comunidad por la no recolección de basuras en la isla, se debe incurrir en la práctica de quema de dichos residuos. Se han generado prácticas para la clasificación y separación de material reciclable,

además de posicionar el requerimiento de que sea transportada la basura que finalmente deba desecharse. Sin embargo, mientras no se cuente con la voluntad institucional, esta intencionalidad de manejo de basuras y contaminantes no podrá ser tramitada por la comunidad.

Protección de las fuentes hídricas desde la experiencia del Consejo Comunitario Las Flores

Los consejos comunitarios afrocolombianos se constituyen como entidades de carácter étnico. En este caso, está conformado por una comunidad negra del corregimiento Las Flores en el municipio Nechí. Se consolida jurídicamente en el año 2015, respaldado por Ley 70 del 27 de agosto de 1993, como herramienta de reconocimiento de las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas.

El consejo tiene la función de administrar el territorio colectivo que le ha sido asignado, velando por los derechos de la propiedad colectiva, el desarrollo comunitario, la preservación de la identidad cultural, y la conservación de los recursos naturales, la fauna, flora, cuidado y manejo de caños, ríos y quebradas. En ese sentido, han realizado los siguientes aportes para el cuidado ambiental del territorio:

Aportes de la experiencia en problemas ambientales presentes en el municipio

- Manejo y limpieza del recurso hídrico

Como consecuencia de la dinámica minera, ganadera y agrícola en el territorio, la tierra es convertida en sedimentos por el agua lluvia, y al ser llevada por el río genera taponamiento de quebradas y caños. El consejo ha liderado, con apoyo de la comunidad, acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces y evitaron así inundaciones.

Esto se realiza “con draga o manual (...). Cuando se hace limpieza de las quebradas, intentamos hacer limpieza de los troncos que hay y pueden obstaculizar y detener el cauce de la quebrada” (D16).

- Defensa de recursos naturales y mediación en conflictos socioambientales

Desde su acción en defensa de los recursos naturales, se han dado disputas con diferentes actores como la empresa Mineros S.A., y dueños de fincas vecinas por el recurso hídrico del territorio, que conciben como “eje transversal articulador de vida”. A Mineros S.A. se le han concedido títulos de explotación minera, pese a que alrededor se encuentra un complejo cenagoso del territorio. La comunidad hizo el reconocimiento del impacto negativo en el “nicho de vida” de los habitantes, por lo que, con la alianza estratégica de Corantioquia, se logró la desagregación de esta zona del título minero cedido.

Esas son áreas protegidas y ahí la comunidad dice “no” porque nos afectan el recurso hídrico, que es el eje transversal articulador de vida. Entonces no podemos nosotros crear problemas de contaminación o acabar con el recurso hídrico, porque acabamos con la vida, así de sencillo (D16).

Un elemento de especial importancia que la experiencia organizativa refiere como relevante para su accionar es la toma de conciencia más que la acción concreta, porque en esa medida se genera un proceso de apropiación del territorio por parte de las comunidades que forman parte de él. Estas comunidades son a su vez las encargadas del cuidado, conservación y preservación de los ecosistemas estratégicos que acompañan la titulación colectiva.

El recorrido por estas experiencias organizativas ha permitido entrever acciones de diversa índole encaminadas al cuidado ambiental y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en razón de la subsistencia, más allá de la concepción de lucro con el que generalmente se intervienen los territorios por parte de las empresas y distintas entidades que hacen presencia.

Manifestaciones de los conflictos y disputas socioambientales

Se hace evidente en la dinámica de los problemas ambientales identificados que los procesos extractivistas de reprimarización de la economía y acumulación por deposición son dinámicas del capitalismo que movilizan, como en otros lugares del país y del continente, su consolidación y avance. Además, en muchos casos, se evidencia el respaldo y facilitación que hace el gobierno a nivel nacional y local para movilizar esta dinámica.

Varios autores coinciden en plantear que el extractivismo es una actividad económica que implica la explotación intensiva de recursos naturales no procesados, o con poca transformación, principalmente para la exportación, y que no están limitados a los hidrocarburos o la minería, sino también a otras actividades, como la agroindustria o el turismo a gran escala (Silvetti y Cáceres, 2015 y Acosta, 2012). En general, el extractivismo se relaciona con la necesidad del sistema económico mundial de abastecerse de las materias primas necesarias para la producción de bienes y servicios.

Estas características del extractivismo generan una dinámica muy común en los países que han vivido procesos coloniales fuertes, principalmente en América Latina, África y Asia, y que es conocida como la maldición de los recursos o “*the paradox of plenty*” en su versión en inglés. Se refiere a la profunda contradicción entre la abundancia de recursos naturales, y las mayores tendencias a niveles altos de pobreza, que se mantienen de manera casi estructural en el tiempo (Acosta, 2012) y que son el resultado de los lugares que el sistema capitalista da a los países con recursos naturales, y a las dificultades que genera el extractivismo para el desarrollo de otras formas de la economía nacional y local que reviertan esta tendencia.

Una de las dinámicas del capitalismo asociada al extractivismo es desarrollada por David Harvey (2005) quien, retomando planteamientos de Marx y Luxemburgo, la nombra como “acumulación por

desposesión”. Este concepto describe de manera clara cómo en el sistema capitalista la ganancia no es solo el resultado de las transacciones económicas alrededor de los medios de producción y el trabajo, sino que tiene que ver, en gran medida, con los procesos de apropiación extensivos que resultan de los factores que generan la riqueza, sobre todo la propiedad, sea esta de tierras, conocimientos, etc.. De esta manera, el capitalismo se sirve de múltiples estrategias como la devaluación y la presión por valorización o impuestos, para permitir que actores particulares se hagan a la propiedad de estos bienes, por lo general a bajo costo y con potenciales de ganancia muy altos.

Para el caso de América Latina, es indiscutible que el continente se ha estructurado desde el proceso de conquista y colonización a partir de fuertes dinámicas de control de la tierra y la fuerza de trabajo, así como de la extracción de recursos, sobre todo de carácter minero (Fernández, 2018). Esta dinámica se ha venido transformando e intensificando con la instauración del sistema capitalista a nivel mundial, pero sobre todo, con la puesta en marcha del modelo neoliberal en la década del 90.

Estos factores muestran que el continente sigue afectado por lógicas de desarrollo asociadas profundamente a procesos de crecimiento económico y progreso, muy propias de modelos desarrollistas, que hacen que incluso los gobiernos más progresistas y de izquierda necesiten de la sobreexplotación de los recursos naturales para apalancar sus modelos económicos y hacer que las propuestas alternativas al extractivismo se vean opacadas e incluso perseguidas, dado que cuestionan una dinámica que es validada por múltiples actores en favor de los recursos necesarios para progresar.

Estas condiciones a nivel global y regional se perciben de manera explícita en las dinámicas económicas, políticas y socioambientales de la región de Bajo Cauca, en la que la generación de condiciones para abrir la dinámica regional al mercado, la poca presencia del Estado y la confrontación armada que afecta la región han imposibilitado la ampliación plena de las dinámicas extractivistas y de acumulación por desposesión y posicionamiento del mercado.

En el caso de Colombia, y particularmente en la región de Bajo Cauca, la pervivencia del conflicto armado ha generado una barrera para la implementación de procesos de apertura al mercado y la presencia del Estado. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC se habla de transiciones, pero como lo menciona Alejandro Castillejo (2017), esa transición es fundamentalmente hacia una democratización de los territorios, y esto, en términos del modelo económico, consiste en generar las condiciones para que las regiones del país que eran controladas por esta guerrilla, sean incorporadas al mercado nacional e internacional.

Estas tendencias globales y dinámicas regionales chocan con muchos intereses de las comunidades y sus organizaciones, quienes desarrollan acciones para mantener y recrear sus modos de vida, reivindicar y garantizar sus derechos, así como contener las tendencias de degradación ambiental que se generan en el territorio.

Los impactos ambientales de las actividades extractivas afectan a diferentes tipos de comunidades. En respuesta, estas desarrollan distintos mecanismos y estrategias de resistencia y defensa de sus derechos y medio de vida como las manifestaciones, los paros, los bloqueos, las gestiones institucionales, la defensa jurídica y las acciones violentas (De Los Ríos, 2016, p. 19).

En este sentido, surgen disputas y conflictos entre actores, que configuran una dinámica regional de relacionamiento, pugna y reivindicación, en la que los diferentes actores hacen explícitos los intereses y consolidan apuestas. No quiere esto decir que el conflicto sea siempre antagonista, también se presentan experiencias de complementariedad de intereses y de cesión de intenciones, haciendo de la dinámica de los conflictos socioambientales en la región, un proceso diverso entre la resistencia y la cohabitación.

A continuación, se presentan algunas acciones alrededor de estrategias de disputa ambiental que, en algunas ocasiones, se configuran en conflictos.

Demandas y quejas ante la autoridad ambiental

Una de las acciones que desarrollan las comunidades tiene que ver con la instauración de demandas y quejas ante la autoridad ambiental para la exigencia de protección del medio ambiente. En las organizaciones consultadas se rescatan, por ejemplo, acciones de queja y demandas hacia privados que realizan explotación minera en sus predios, pero generan afectaciones como vertimientos de material en áreas protegidas, cuerpos de agua, etc..

Se hace la demanda y el finquero paga la multa. Esa tuvo repercusión, porque vinieron funcionarios del municipio a mirar por el daño que había hecho ambiental, y Corantioquia también vino. Porque Corantioquia es la encargada de lo que es las fuentes hídricas, entonces ellos estuvieron acá y se dieron cuenta, entonces ellos llevaron la queja, porque aquí se pusieron a trabajar minas de chorro y estaban tapando lo que era la ciénaga (D16).

De igual manera sucede frente a los manejos inadecuados de cuentas y nacimientos, no necesariamente afectados por la actividad minera, sino por problemas como la deforestación, ganadería, monocultivos, entre otros.

Le metieron una demanda por eso, y ellos dijeron: “las tierras son de nosotros”, sí, pero las aguas no. [Esto lo realizó] el dueño de la finca [donde estaba ese nacimiento]. Ellos picaron para hacer la cosecha. [Esta demanda] la hicimos nosotros, con el municipio creo, Corantioquia [también] vino. Los dueños de esa finca tuvieron que pagar una multa (D16).

Este tipo de procesos de solicitudes ante entidades públicas son una de las estrategias utilizadas que evidencian el conflicto en términos de afectaciones al medio ambiente, por parte de particulares o de empresas presentes en la zona. Estas evidencian fundamentalmente conflictos relacionados con la afectación de privados hacia bienes comunes, o colectivos que deterioran la calidad de vida de las

comunidades. Por lo general, dan cuenta, por un lado, de ideas y prácticas divergentes entre los privados y su visión individual de la acción que realizan y, por el otro, de la mirada colectiva que reconoce las afectaciones comunitarias de dichas acciones.

Exigencia para reconocer la diferencia entre minería ilegal y minería informal y tradicional

Otro proceso que se evidencia con bastante fuerza en la región tiene que ver con la exigencia al Gobierno nacional para que reconozca que no toda minería informal es ilegal. En el Bajo Cauca la tradición minera implica que muchas comunidades encuentran en la extracción de oro y otros materiales una actividad ancestral, como es el caso del barequeo o de personas que realizan la extracción para la subsistencia. Estas reivindicaciones tienen dos dimensiones, por un lado, la exigencia de no criminalizar la acción de la minería informal, porque actualmente el ejército nacional y la policía realizan operativos para frenar este tipo de actividad, con la posterior quema de maquinaria, sin generar alternativas económicas a estos actores. Por otro lado, la de formalizar otras maneras de extracción minera, dado que por lo general se privilegian los títulos mineros a las grandes empresas, nacionales y multinacionales, lo que genera una dinámica de fuga de recursos en detrimento de las condiciones de vida de la población local.

Mobilización Social y Acción Legal frente al proyecto Hidroitungo

El proyecto Hidroitungo es, si se quiere, el megaproyecto de infraestructura al que las personas atribuyen mayores afectaciones sobre el territorio, ya que ocasiona múltiples problemas ambientales, sobre todo alrededor del río Cauca y el río Nechí. Es por esto que se ha generado rechazo al proyecto, y la identificación de los impactos frente a este tema está presente en el discurso de las comunidades.

Las afectaciones por el proyecto han generado varias dinámicas; por un lado, las comunidades han desarrollado procesos de movilización, visibilización de las problemáticas, y acciones legales para exigir al proyecto la reparación por los daños y la recuperación en términos ambientales y sociales. Por su parte, el proyecto ha generado una serie de acciones para satisfacer a los afectados.

Entre los resultados de las acciones legales y movilización social se encuentran las medidas cautelares generadas por las autoridades ambientales para la gestión del riesgo en la zona, así como la mitigación de los impactos sobre los ecosistemas del río.

De manera similar, se rescata el proceso declaratorio para reconocer el río Cauca como un sujeto de derechos (Sentencia 038 de 2019 del Tribunal Administrativo de Medellín). Este proceso implicó la colaboración de varias organizaciones y procesos a nivel nacional, y se convirtió en un hito en la reparación integral por las afectaciones del proyecto Hidroituango y de reparación a víctimas del conflicto armado.

Además, es importante mencionar los conflictos generados en las comunidades a partir de las estrategias de reparación emprendidas por el proyecto. En los últimos años se viene contratando a miembros de las comunidades y las organizaciones para ser agentes sociales en esos procesos de mitigación y reparación. Esta se convierte en una alternativa económica importante para las personas, a la vez en que genera discusiones al interior de las comunidades al reconocer que esta acción busca cooptar a los líderes y reducir la capacidad de las comunidades de exigir sus derechos.

El proyecto Hidroituango ha generado rechazo en muchos sectores sociales del país, por lo que el relacionamiento entre actores y la articulación entre ellos se ha constituido en una estrategia que da cuenta de la existencia de este conflicto. A nivel regional también se presenta este proceso de articulación que genera ejercicios educativos y de sensibilización sobre las temáticas, y posibilita acciones mancomunadas de visibilización y exigencia.

Confrontación y diálogo con las partes

En muchos casos se generan confrontaciones directas entre actores, por lo general entre finqueros y comunidades, o con empresas mineras. En este caso, las comunidades identifican que es necesario una acción directa, sin intermediación del Estado u otro órgano de control. De igual forma, manifiestan que establecen procesos de diálogo con los actores que generan la afectación y, en caso de que no funcione, generan confrontación exigiendo que cesen las acciones. A propósito se rescatan los siguientes relatos de participantes:

Pues minerías ilegales que a veces echan esos materiales a la Ciéne-ga, y a veces nos toca afrontar y dialogar con esas personas para que no lo sigan haciendo...bueno y teniendo también el cuidado (D78).

Bueno, yo ayer pasaba por el territorio de Omagá, directamente los territorios no están... no tienen afectación por la minería, están las minas a los alrededores, pero no están afectando al territorio, cuando nosotros vemos minería que pronto vaya a afectar nuestro territorio, o vemos un megaproyecto que se vaya a realizar y vaya a afectar el territorio, pues nosotros concertamos primero y dialogamos (D81).

Hablando del tema de deforestación, estuvimos hablando con el propietario de la finca, que nosotros ponemos el talento humano y él colocaba los árboles por aquí alrededor de la vereda, entonces estamos muy incisivos en eso (D86).

Como se evidencia, las comunidades han desarrollado durante mucho tiempo de presencia en el territorio, mecanismos para el abordaje de estos conflictos, en los que plantean alternativas concretas y procesos de diálogo, aunque también de confrontación y posicionamiento en caso de ser necesario.

Constitución de áreas protegidas

Las acciones legales para la declaratoria de áreas de reserva y protección es otra de las manifestaciones de conflictos socioambientales en la zona. Para las organizaciones, esta se constituye en una oportunidad para desarrollar herramientas legales que eviten la explotación del territorio por parte de empresas mineras u otros actores. Aunque se reconoce que es un proceso largo, se considera vital para que las comunidades puedan asumir gobernanza sobre estos territorios y evitar la adjudicación de nuevos títulos mineros que aporten a la degradación del suelo y los ecosistemas. Al respecto, mencionan algunos participantes:

La existencia de un área protegida ofrece herramientas jurídicas para interlocutar con las entidades mineras (D16).

Por eso te digo que no estoy mintiendo con la cuestión de que dejen el bareque como patrimonio cultural del municipio, es por eso porque es que estando así ya la cosa sería diferente (D74).

En el último caso, se evidencia que la figura de patrimonio cultural se constituye en una especie de acción de conservación que permite el establecimiento de reclamaciones legales y la exigencia de derechos.

Miedo a visibilizar situaciones

Un factor a tener en cuenta en la configuración de los conflictos socioambientales tiene que ver con la pervivencia del conflicto armado en la zona y en el país. Por un lado, es importante reconocer que para las bandas delincuenciales y los grupos paramilitares que han ganado terreno en la zona es fundamental conservar tanto el control territorial que ejercen como el manejo de las fuentes de ingresos: el caso de la minería o el cultivo de cocaína son tarea fundamental de estos grupos. Este fuerte control territorial limita la acción libre de las organizaciones y genera hechos victimizantes que paralizan la

acción colectiva (desplazamiento forzado, desaparición, masacres, entre otros), lo que evidencia además una apuesta de estos grupos y la clara contraposición a las acciones de organizaciones sociales. Por otro lado, se continúan presentando en el país y la región asesinatos a líderes sociales y ambientales, lo que constituye en una estrategia de silenciamiento a las organizaciones y sus procesos.

Mitigando efectos del cambio climático desde las experiencias organizativas del Bajo Cauca Antioqueño

Para iniciar esta reflexión, es importante retomar el concepto de cambio climático que plantea Álvarez (2020), para quien es un fenómeno generado por las alteraciones del clima en un entorno o ambiente determinado, y las relaciones existentes entre factores atmosféricos, biológicos y ambientales, entre los que se generan constantes flujos de energía. Desde esta concepción, el cambio climático se constituye como el resultado de múltiples factores que afectan la relación que condiciona el clima, en un fenómeno que se genera a diferentes escalas, sea esta local, regional o planetaria, y que es el resultado de la interacción de múltiples causas.

Asimismo, es importante reconocer que el cambio climático que vive el planeta en la actualidad es un proceso generado fundamentalmente por factores antrópicos producidos en los últimos siglos, marcados por la aceleración de la industrialización y del consumo. Esto plantea, por un lado, la necesidad de reconocer las formas en las que los seres humanos habitamos actualmente el planeta y su efecto sobre los cambios y modificaciones aceleradas del clima y, por el otro, el impacto que tiene el modelo económico asumido en los últimos siglos y su clara relación con el deterioro ambiental a nivel planetario. Por ello podemos afirmar en palabras de Ojea y Armenestre (2018) que el cambio climática es un hecho social por lo que debe ser resuelto por la sociedad y sus diferentes agentes y procesos.

En este orden de ideas, surge una reflexión mayor, en términos de no desconocer la relación entre el cambio climático y el modelo económico y el pensamiento hegemónico asumido por la mayor parte de nuestra sociedad, basado en la idea de progreso y crecimiento económico. En este respecto, Leff plantea que

La problemática ambiental, más que una crisis ecológica, es un cuestionamiento del pensamiento y del entendimiento, de la ontología y de epistemología con las que la civilización occidental ha comprendido el ser, los entes y las cosas; de la ciencia y de la razón tecnológica con la que ha sido dominada la naturaleza y economizado el mundo entero... La crisis ecológica actual por primera vez no es un cambio natural (2018, p. 4).

Por esto, es fundamental comprender otras maneras de resolver la vida, de comprender, relacionarse y actuar en el mundo, dado que en estas formas otras de relación entre seres humanos y de estos con el planeta es posible ubicar alternativas a esta problemática mundial. En este sentido, los cambios y transformación que implica afrontar el cambio climático deben partir de preguntas por lo que somos como sociedad, y por las maneras en las que generamos nuestras condiciones de existencia. De continuar resolviéndolas desde modelos profundamente utilitaristas, la relación que tenemos con las demás personas y con la tierra continuarán degradando sus condiciones y generando consecuencias para la vida en el planeta. El tejido social y organizativo en los territorios tiene mucho que aportar a este respecto.

Para analizar las aportaciones que las organizaciones sociales del Bajo Cauca Antioqueño hacen al cambio climático, es importante reconocer los factores generadores de este fenómeno. Esto permitirá reconocer la manera en que estas experiencias desarrollan aportes concretos.

En torno a los factores generados, como se mencionó anteriormente, la relación entre intensificación del modelo económico y cambio climático es indudable. Es por ello que sus causas están directamente asociadas con la explotación de los recursos naturales,

la generación de desechos producto de los procesos de producción y manufactura, los patrones de consumo y la transformación de los ecosistemas, principalmente.

La complejidad del problema radica también en la progresividad del fenómeno a partir de la intensificación de sus causas. El caso del deterioro de los bosques y los cuerpos de aguas es un buen ejemplo de ello, dado que tanto uno como otro tienen una alta capacidad de retención de dióxido de carbono; por ello al generar deforestación o la desaparición de cuerpos de agua se da la liberación de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y la reducción de la capacidad de absorción de los mismos. Esto muestra cómo las consecuencias propias del cambio climático generan una intensificación de sus causas, en un círculo que puede llegar a un punto de no retorno.

Organizaciones sociales del Bajo Cauca antioqueño: de la defensa del territorio al aporte para el cambio climático

La conformación de las organizaciones sociales que trabajan por el bien de grupos y comunidades en la construcción de alternativas colectivas a los problemas cotidianos y de acciones conjuntas para preservar, mantener y dignificar la vida, así como en el ejercicio y la reivindicación de derechos, es en una de las principales aportaciones de las comunidades locales para la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. Los procesos organizativos son, en muchos casos, la expresión de visiones de desarrollo alternativos, de confluencia de intereses más allá del lucro y del utilitarismo propio del mercado. Asimismo, generan lazos y prácticas que sobrepasan la visión tradicional de desarrollo económico e interés de lucro individual, y propician escenarios para la materialización y fortalecimiento de procesos de participación y construcción de prácticas, las cuales sobrepasan las visiones de mundo asociadas al capitalismo y al progreso, que a su vez, posibilitan la sobreexplotación de la naturaleza, anteponiendo los intereses individuales a los colectivos.

Por otro lado, la existencia de procesos organizativos locales sienta las bases para una gobernanza comunitaria real y posible, en clave de reconocer las capacidades comunales para resolver los problemas sociales. Contar con organizaciones comunitarias fuertes permite canalizar las capacidades comunitarias y potenciarlas para la satisfacción de necesidades, la construcción de procesos de articulación regionales y la movilización de condiciones para la resolución de problemas ambientales, sobre todo asociados al cambio climático.

Apropiación social del territorio

Las organizaciones sociales abogan por habitar el territorio, territorializar el medio ambiente, y hacer de este un escenario de configuración de prácticas y significados que hagan posible formas de relación con la naturaleza coherentes con sus formas de entender y construir la vida.

Cuando desde las organizaciones se habla de la necesidad de la titularidad de la tierra, la conformación de territorios colectivos o la declaratoria de una zona de reserva, de lo que se está hablando es de la posibilidad que esto genera de habitar el territorio para la construcción de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales propias de sus modos de vida, para protegerlas de los intereses comerciales que ven en ellos casi exclusivamente recursos y servicios para la generación de riqueza.

Por ello, cuando las organizaciones tienen la titularidad de la tierra o son agentes de conservación de áreas de reserva, se generan las bases para limitar la deforestación y la explotación extralimitada de la naturaleza, contribuyendo con ello a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y la capacidad de los bosques de retenerlos y conservarlos, así como generando condiciones para evitar consecuencias como el desbordamiento de ríos o las inundaciones.

Asimismo, se dan condiciones para una ganadería y un agricultura no extensiva, factores que no contribuyen, como las actividades extensivas, a la generación de gases de efecto invernadero y la contaminación de fuentes hídricas, sino a la conservación de la capa vegetal.

La conservación de agua como eje fundamental de la vida

Las organizaciones participantes de esta investigación también dieron cuenta de sus prácticas alrededor de la limpieza, conservación y recuperación de fuentes de agua, sean estos nacimientos, lagunas, ciénagas o humedales. Este aporte es fundamental en dos sentidos: por un lado, en términos de mitigación de los efectos del cambio climático, dado que la conservación de cuerpos de agua aporta a la captura de CO₂ y al no aumento del mismo, así como permite mantener las condiciones de regulación de los ecosistemas. Por otro lado, este aporte es vital en clave de adaptación, dado que genera posibilidad de acceso al agua, que escasea cada vez más y será una de las mayores afectaciones con el cambio climático.

Se evidencian entonces las acciones de organizaciones como Gente y Bosques, Asociación las Pampas y el Cabildo Indígena fundamentalmente, en torno a la reforestación de áreas degradadas por la minería y la ganadería extensiva principalmente. Es indudable el aporte en este sentido para la mitigación de los efectos del cambio climático, sobre todo en lo que tiene que ver con mantener la capa vegetal y promover la absorción de dióxido de carbono.

Aprovechando la basura: una apuesta económica por la reducción de residuos

Otro elemento a rescatar en las prácticas organizativas tiene que ver con su apuesta por la disposición adecuada, la reutilización y el reciclaje del material desechado en los hogares y pequeñas empresas. Esta apuesta se constituye como un aporte significativo en la medida que disminuye la quema de basuras o su enterramiento, y posibilita el aprovechamiento de materiales que por lo general contaminan las tierras, los ríos y otros cuerpos de agua.

Los procesos en torno a la reducción y aprovechamiento de los residuos se constituyen también en una alternativa para la generación de ingresos para las comunidades, y se convierten en una alternativa en torno a la empleabilidad y el nivel de ingresos.

Finalmente, vale la pena resaltar que las contribuciones de los procesos locales deben verse en dos dimensiones: por un lado, la dimensión local, dado que las alteraciones de la naturaleza repercuten en el aumento de la temperatura, la contaminación o el deterioro de territorios particulares, y generan micro-cambios climáticos. Por otro lado, las acciones que realizan puede contribuir a la afectación a dinámicas globales del clima. Es indiscutible la interconexión del planeta que implica el reconocimiento de la afectación que las acciones locales generan sobre todo el sistema climático a nivel planetario, pero también la importancia de conectar las experiencias organizativas locales para que sus procesos alternativos permitan el fortalecimiento mutuo en diferentes latitudes, y reconozcan lo global y local de las problemáticas ambientales y la glocalidad de las resistencias comunitarias.

A modo de conclusiones

La historia de la constitución de América Latina está atravesada por el proceso de conquista y colonización de la tierra, así como por la extracción de recursos, sobre todo de carácter minero (Fernández, 2018). Siguiendo a Alimonda (2011), se advierte una problemática originaria de afectación y colonización del mundo natural en la región de Latinoamérica. En ese sentido, desde la historia ambiental es posible dar cuenta de los costos ocultos de los procesos desarrollistas y de agricultura industrial hegemónicas, que han dejado como resultado la degradación de los ecosistemas y de los procesos sociales y culturales de los grupos humanos cuya fuente de vida es la tierra.

Asimismo, Machado (2015) coincide con esta discusión de la larga historia de desarrollo desigual de las relaciones entre las sociedades y la naturaleza, y permite ubicar la cuestión del conflicto socioambiental en un entramado amplio, referido a la tradición crítica del pensamiento latinoamericano y la teoría de la dependencia, cuyo

relato cobra vigencia respecto de los problemas del llamado “desarrollo”. Según afirma Machado (2015), el espejismo generado por las visiones de “desarrollo” ha obnubilado las formas de explotación de la fuerza de trabajo, las relaciones imperiales/coloniales entre sociedades, y las formas de depredación de la naturaleza, circunstancias y efectos del proceso de acumulación capitalista. Desde esta mirada crítica, es posible dar cuenta de una nueva forma de colonialismo expresado en el extractivismo y el neoextractivismo.

A partir del ejercicio de investigación, es posible entrever cómo la región del Bajo Cauca se inscribe en una dinámica extractivista que ha implicado la explotación intensiva de los recursos naturales, y que ha generado la apropiación de los territorios basada en el interés económico. Esta concepción diverge respecto de la forma como los territorios son habitados y recreados por las comunidades, para quienes se convierten en un espacio social en el que se materializa la identidad cultural y se hace posible la vida, en relación estrecha con los recursos naturales.

Indudablemente, de acuerdo a lo señalado, esta intencionalidad ha generado unos impactos que actualmente redundan en la crisis climática que pone en cuestión los horizontes de sentido bajo los cuales se desarrollan los modos de vida contemporáneos. Esto propone la urgencia de nuevos campos de reflexión y acción para deconstruir la trama de poder que se ha aplicado al mundo natural (Leff, 2017), y ha generado desequilibrio en los ecosistemas, degradación de la biosfera, acumulación por desposesión (Harvey, 2005) y desterritorialización de los pueblos.

En esta línea, se hace relevante reconocer en las organizaciones sociales una posibilidad de establecer relacionamientos que pongan en debate la diversidad cultural, cuestionando el indiscriminado uso y aprovechamiento de los ecosistemas y sus recursos naturales, justamente desde la defensa de cosmogonías propias y formas de comprender el mundo que contrarían la hegemonía del capital.

Bibliografía

Agencia de Renovación Territorial (s.f.). https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/

Álvarez, L. B. A. (2020). *Formulación de un concepto de gestión del riesgo del cambio climático ajustado a las condiciones naturales de Colombia*. Bogotá: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Azuro Melo, J.F. (2019). Resistencia, petróleo y conflicto armado en la Amazonia Andina: Análisis desde la Geografía Crítica y la Sociología Política del conflicto socioambiental del Bloque San Juan. *Scripta Nova*, 23. <https://doi.org/10.1344/sn2019.23.22255>

Castillejo, A. (2017) *La ilusión de la justicia transicional. Perspectiva crítica desde el sur global*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Del Valle-Cárdenas, B., Valdés-Rodríguez, O., Conde, C. y Zavaleta-Lizárraga, L. (2020). Las organizaciones de la sociedad civil y su papel en la adaptación al cambio climático en México. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 25(87), 1149-1182.

Echeverría, M. y Rincón, A. (2000). Capítulo I. Complejidad conceptual del territorio y la territorialidad. En *Ciudad de territorialidades: polémicas de Medellín* (pp. 9-43). Colombia: Centro de Estudios del Hábitat Popular.

Fernandez, J. (2018). El territorio como espacio contradictorio: promesas y conflictos en torno a la actividad extractiva en Ecuador, Colombia, Perú y Chile. *EURE: Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, 46, 225-246. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7185649>

Instituto Popular de Capacitación -IPC-. (s.f.). <http://ipc.org.co/>

Issuu Gente y Bosques (2016). <https://issuu.com/bosques2016>

De Los Ríos, S. (2016). La paz extractiva y el conflicto socioambiental en Colombia. *Revista Conexión*, 5(6), 8-27.

- Leff, E. (2018). Pensar la complejidad ambiental. *La complejidad ambiental*, noviembre, 7-53.
- Lyons, K. (2020). Ríos y reconciliación profunda: la reconstrucción de la memoria socio-ecológica en tiempos de conflicto y “transición” en Colombia. *Maguaré*, 33(2), 209-245. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lorca, M. P. (2018). Población, cambio climático y huella ambiental. *Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment*, 9(1), 11-36.
- Machado, H. (2015). Conflictos socioambientales y disputas civilizatorias en América Latina: Entre el desarrollismo extractivista y el Buen Vivir. Crítica y Resistencias. *Revista de conflictos sociales latinoamericanos*, 1(1), 19- 42.
- Mançano, B. (2009). Territorio, teoría y política. <https://problemasrurales=.files.wordpress.com/2008/12/territorio-teoria-y-politica-bernardo.pdf>
- Ojea, L., & Armenestre, P. (2018). Así nos afecta el cambio climático. *Greenpeace*, 3(1), 75-89.
- Peace Brigades International (s.f.). Cronología de los acompañamientos de PBI Colombia. *PBI Colombia Blog*. <https://pbicolombiablog.org/sobre-pbi/cronologia/>
- Robledo, M. J. (2018). Conflictos ambientales: nuevas miradas y desafíos para su abordaje. *Tiempos de Gestión*, 25, 99-130.
- Sepúlveda Vargas, R. D. (2015). Conflictos socioambientales en la cuenca baja del Río Sinú, Colombia. *Revista Direitos Emergentes Na Sociedade Global*, 4(1), 23-43. <https://doi.org/10.5902/2316305420377>
- Torres, R. (2019). Dinámicas de organización social y campos estratégicos de tarea comunicacional para el bien común. *Quórum Académico*, 16(1), 57-76.
- Valle-Cárdenas, B. del, Valdé-Rodríguez, O.A., Conde, C. y Zavaleta-Lizárraga, L. (2020). Las Organizaciones de la sociedad civil y su papel en la

adaptación al cambio climático en México. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25(87), s.d.

West, Robert (1972). *La minería de aluvión en Colombia durante el periodo colonial*. Bogotá: Imprenta Nacional.